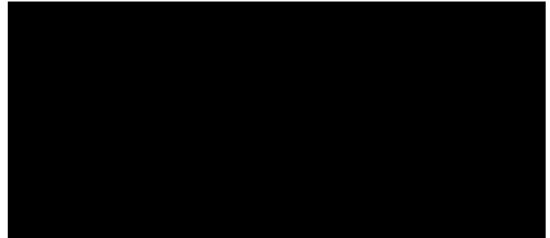


CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,
SECRETARIA AUTONÒMICA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES



Ref.: AR/eb

Assumpte: accés a la informació pública

Rn: APV/0441/2021

GVAGIP/2021/619

Establiment: Bar La Camarga (Riola)

Visto el escrito presentado por la Sra. [REDACTED], con DNI núm. [REDACTED], el 9 de noviembre de 2021, según los siguientes

HECHOS

Primero. Con fecha de 10 de noviembre del actual, a través del Registro departamental núm. 08/00121/2021/10310/E, tuvo entrada en este órgano, el escrito presentado el día 9 de noviembre de 2021, por la Sra. [REDACTED] en el Registro electrónico de la Generalitat.

Segundo. A través del mencionado escrito la Sra. [REDACTED] denuncia la existencia de incumplimientos sistemáticos del horario de apertura y cierre del establecimiento público denominado Bar La Camarga, sito en la plaza Mestre Sant Francisco, núm. 10 de Riola, que fue reducido por la Administración local competente de la franja diurna ordinaria fijada por la disposición administrativa anual dictada por la Administración de la Generalitat al efecto, para el grupo J de establecimientos (Ciber café, restaurante, café, bar y cafetería), entre los que se encuadra el establecimiento denunciado, a la franja diurna restringida establecida en virtud de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica, esto es, de 8.00h. a 22.00h.

Todo ello en ejecución de la Sentencia firme del del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana núm. 334, de 10 de mayo de 2018, de la

**CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,
SECRETARIA AUTONÒMICA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES**

Sala de lo Contencioso Administrativo, dictada en el recurso de apelación núm. 265/2016, interpuesto por D^a [REDACTED] y D. [REDACTED] por inactividad de esa corporación local en materia de ruidos en relación con la actividad del mencionado establecimiento público.

Tercero. La documentación adjunta a la denuncia, ya tuvo entrada en este órgano a través de oficio del Ayuntamiento de Riola, registrado con núm. GVRTE/2020/137208, de 20 de enero de 2020.

Cuarto. Sin perjuicio de la formalización de la denuncia descrita, la Sra. [REDACTED] en el mismo escrito de 9 de noviembre del actual, solicita información relativa a si, a raíz de la remisión por el Ayuntamiento de Riola de la documentación acreditativa de los incumplimientos horarios de la actividad desarrollada por el establecimiento denunciado, por este órgano se ha incoado algún procedimiento sancionador por la comisión de la infracción grave del artículo 51.1.18 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos y cuál ha sido el sentido de la resolución final recaída en el mismo.

Atendiendo a las circunstancias fácticas expuestas, el escrito presentado por la Sra. [REDACTED], según su verdadero carácter, además de haberse tramitado como una denuncia a efectos sancionadores, entraña una solicitud de información pública, de conformidad con los siguientes

Fundamentos de Derecho

I. Con carácter preliminar procede precisar que si bien, en virtud de lo previsto en el artículo 62.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (en adelante, LPAC), la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de persona interesada en el procedimiento (y ello con independencia de que se pueda reconocer a la interesada en los concretos procedimientos que se sustancien tal condición, habida cuenta de su interés legítimo acreditado), el artículo 11 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, y el artículo 42.1 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, establecen que cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en

**CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,
SECRETARIA AUTONÒMICA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES**

representación de cualquier organización legalmente constituida, tiene derecho de acceso a la información pública mediante una solicitud, sin necesidad de motivarla ni invocar la normativa habilitante al efecto, y sin más limitaciones que las contempladas en la ley.

II. En cuanto a la solicitud de acceso a la información pública, ostenta la **competencia** para la resolución del procedimiento, según el artículo 18.1 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, las personas titulares de los centros directivos responsables funcionales de la información solicitada. En consecuencia y según el artículo 13 del Decreto 172/2020, de 30 de octubre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, el órgano competente en este caso recae en la persona titular de la Dirección General Operativa, en tanto que titular del centro directivo responsable funcional de la información cuyo acceso se solicita.

No obstante lo anterior, y ante la situación de ausencia del director general, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se prevé la sustitución de la persona titular de la Dirección General Operativa durante su ausencia, asume la sustitución aludida, la persona titular de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias.

III. En lo relativo a la **solicitud de acceso a la información** formulada, debe significarse lo siguiente:

Por riguroso orden de entrada, en el Servicio competente para la tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de espectáculos y establecimientos públicos, se ha ido abordando la sustanciación de las peticiones razonadas y denuncias recibidas en las fechas que se corresponden con la petición remitida por el Ayuntamiento de Riola y de conformidad con ello, se han abierto las actuaciones previas referenciadas como **APV/0441/2021**, a las que se ha incorporado la nueva denuncia presentada por la Sra. [REDACTED] así como un requerimiento formulado al Ayuntamiento competente y otro a la Policía Autonómica para que

**CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,
SECRETARIA AUTONÒMICA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES**

continúe realizando las inspecciones necesarias y complementarias de las ya realizadas por la Policía Local de Riola.

Asimismo, procede remarcar que desde el Servicio de Establecimientos Públicos y Régimen Jurídico se han asumido las competencias de tramitación de procedimientos sancionadores en el ámbito del incumplimiento de las medidas contra la Covid-19, y dado el volumen ingente de actas de denuncia y peticiones en esta materia se ha ralentizado el normal funcionamiento de esta actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, debe ponerse de manifiesto que la documentación remitida por el Ayuntamiento de Riola (a la que se adjuntó la misma documentación que ahora aporta la persona denunciante y solicitante de información) se recibió en el Servicio competente con fecha de 31 de enero de 2020 a través del Registro Departamental RDE08/00121/2020/344/E. Menos de dos meses después, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dicho Real Decreto indicaba, en su disposición adicional tercera, que se suspendían los términos y se interrumpían los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, y solamente se exceptuaban de dicha suspensión los procedimientos relativos a la afiliación, liquidación y la cotización de la Seguridad Social, así como a los plazos tributarios ámbito sujeto a normativa especial, por lo que desplegó todos sus efectos sobre los procedimientos en materia sancionadora.

Consecuentemente con lo anterior, la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto 463/2020 al regular específicamente la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, estableció expresamente la suspensión de tales plazos, durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas.

Procede indicar asimismo que la suspensión quedó levantada mediante la derogación de la citada disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, a través de la disposición adicional única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo,

**CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,
SECRETARIA AUTONÒMICA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES**

con efectos de 1 de junio de 2020 y que el artículo 10 del mismo Real Decreto alzó expresamente la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad con efectos de 4 de junio de 2020.

Habida cuenta de lo anterior, existen actuaciones previas abiertas pero no se ha incoado todavía el procedimiento sancionador que pueda corresponder, y en el que en su caso, procedería reconocer a la Sra. [REDACTED], la condición de interesada.

Visto que no concurren en este caso los límites del acceso a la información pública, el régimen aplicable en el caso de que la información solicitada contenga datos de carácter personal y el régimen sobre las causas de inadmisión, previstas en los artículos 12, 13 y 16.1 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, así como los artículos 44 a 49 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, procede estimar el acceso a la información contenida en las actuaciones previas realizadas referenciadas como APV/0441/2021, y con mayor razón, tras haberse ponderado conforme con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, el interés legítimo acreditado por la persona solicitante de información, señalando que se han incorporado actuaciones nuevas, distintas de las ya conocidas por la persona solicitante.

Por todo lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero. En atención a los hechos y los fundamentos de Derecho descritos y visto que la solicitud no incurre en ninguno de los límites de acceso a la información pública ni contiene datos de carácter personal que hayan de ser protegidos ni existe causa de inadmisión, se estima la solicitud, se concede el acceso a la información pública solicitada y se pone a disposición de quien la ha solicitado como anexo a la presente resolución.

Segundo. La información pública puesta a disposición por la presente resolución podrá ser reutilizada según lo dispuesto en el capítulo III del título II del Decreto 105/2017, de 28 de julio.

**CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,
SECRETARIA AUTONÒMICA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES**

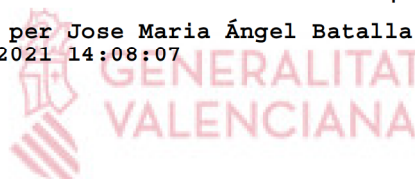
No obstante, de conformidad con el apartado 5 del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno "La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso". De acuerdo con esto, la información pública obtenida en virtud del derecho de acceso que contenga datos de carácter personal estará sometida al Reglamento General de Protección de Datos y el resto de normativa en la materia, debiendo respetar especialmente los principios de protección de datos que exigen que los datos sean tratados de forma legítima, proporcional, veraz y con pleno respecto a los derechos de las personas afectadas.

Tercero. Notificar a la persona interesada la presente resolución, con la indicación de que contra esta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en los artículos 112, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, con carácter potestativo y previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en el plazo de un mes, contado también desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, y el artículo 57 del Decreto 105/2017, de 28 de julio.

La persona titular de Secretaría Autonómica
de Seguridad y Emergencias

(por sustitución del titular de la Dirección General Operativa)

Firmat per Jose Maria Àngel Batalla el
23/12/2021 14:08:07



València, fecha de la firma digital